



Guatemala, 8 de octubre de 2020. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales – CIEN, a través del Observatorio #COVID19GT, presentó información actualizada al 30 de septiembre. El Observatorio #COVID19GT es un proyecto financiado por el Centro para la Empresa Privada Internacional- CIPE el cual tiene como fin transparentar la respuesta del gobierno mediante un seguimiento periódico del gasto público destinado para responder a la pandemia COVID-19.

Jorge Lavarreda, investigador asociado del CIEN y encargado del Observatorio, comentó que son Q15,339.0 millones presupuestados a septiembre 2020 para responder al COVID19, de los cuales las diferentes instituciones han ejecutado el 65.9%. Además, el 95.2% de este total presupuestado corresponde a programas creados por los Decretos 12, 13 y 20-2020, para hacer frente a la emergencia, lo que equivale a Q14,610 millones. De estos fondos, se ha ejecutado el 67.1%.

“Para explicar de una manera más fácil y poder determinar cómo se están priorizando los recursos agrupamos los programas en cuatro categorías” explicó Lavarreda “las cuales son: Apoyo a personas, Apoyo a empresas, Servicios de salud e Infraestructura. En promedio, de agosto a septiembre hubo un avance en ejecución presupuestaria en estas categorías de un 18.2%. Resalta, sin embargo, que donde más se avanzó fue en Apoyo a personas (23.3%), ya que se trasladó el 100% del subsidio de la energía eléctrica al INDE y el Programa Bono Familia alcanzó un 82.9% de ejecución. Por otra parte, dentro de la misma categoría, el Programa de Agricultura Campesina lleva una ejecución de 0%, por contratiempos en el proceso de adquisición, y el Programa de Dotación Alimentaria muestra solamente un 3.3% de ejecución. De igual manera, en Apoyo a empresas hubo avances (17.8%), debido a las transferencias al Crédito Hipotecario Nacional para los Fondos de Protección de Capitales, Crédito de Capital de Trabajo y de Protección al Empleo. Aunque, falta ejecutar el Fondo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a través de BANRURAL”.

Respecto a las otras dos categorías, el experto compartió que en Servicios de salud las adquisiciones se centran en tres renglones de gasto: 1) Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud (47.8% del presupuesto vigente), 2) Elementos y compuestos químicos (28.6% del presupuesto vigente), y 3) Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio (23.4% del presupuesto vigente). Mientras que la categoría de Infraestructura avanzó por las adquisiciones en el programa de remodelación e infraestructura del Ministerio de Salud (Decreto 12-2020) pero ha tenido nula ejecución en las obras de infraestructura de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y los cinco proyectos de infraestructura del Ministerio de Salud.

Asimismo, Lavarreda indicó que los programas Caja Saldremos Adelante, Apoyo al Comercio Popular, Subsidio a la Energía Eléctrica y el Bono de Riesgo a Personal de Salud pueden categorizarse como “finalizados”, mientras que Alimentación Escolar y Bono Familia en “avanzados” y los programas de Protección al Empleo y Crédito para Capital de Trabajo en “etapa intermedia”. Resaltan el Programa Adulto Mayor y Dotación Alimentaria como “rezagados”.

“Sí es posible dar seguimiento a la ejecución presupuestaria de los recursos asignados por el Gobierno Central para responder a la pandemia del COVID-19” indicó Lavarreda y concluyó, no obstante, que “hay algunos programas que hacen transferencias o anticipos a otras entidades, por lo que es crucial que éstas proporcionen información adicional para determinar la ejecución presupuestaria de la entrega o prestación de esos servicios. El tablero de control del COVID-19 del Ministerio de Finanzas permite monitorear los diferentes programas, pero es necesario profundizar sobre las causas de los distintos niveles de ejecución en las diferentes categorías, con el fin de mejorar su desempeño y el diseño de los programas en el futuro”.